

BOE

Boletín Oficial del Estado de 26/05/2012 – nº 126

Boletín Oficial del Estado de 28/05/2012 – nº 127

Boletín Oficial del Estado de 29/05/2012 – nº 128

Medidas urgentes. Comercio y servicios. Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. [\[+ ver BOE\]](#)

(...) se modifica la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, reguladora de la declaración tributaria especial, con objeto de determinar el valor a efectos fiscales de los bienes o derechos que hayan sido objeto de declaración, al tiempo que se introducen ciertas cautelas con la finalidad de evitar situaciones de desimposición;(…)

Disposición final tercera. *Modificación del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.*

Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, se añaden dos nuevos apartados 6 y 7 en la disposición adicional primera del citado Real Decreto-ley, que quedan redactados de la siguiente forma:

«6. Cuando el titular jurídico del bien o derecho objeto de la declaración tributaria especial no resida en territorio español y no coincida con el titular real, se podrá considerar titular a este último siempre que llegue a ostentar la titularidad jurídica de los bienes o derechos con anterioridad a 31 de diciembre de 2013.

7. El valor de adquisición de los bienes y derechos objeto de la declaración especial será válido a efectos fiscales en relación con los impuestos a que se refiere el apartado 1 anterior, a partir de la fecha de presentación de la declaración y realización del ingreso correspondiente. No obstante, cuando el valor de adquisición sea superior al valor normal de mercado de los bienes o derechos en esa fecha, a efectos de futuras transmisiones únicamente serán computables las pérdidas o en su caso, los rendimientos negativos, en la medida que excedan de la diferencia entre ambos valores.

En ningún caso serán fiscalmente deducibles las pérdidas por deterioro o correcciones de valor correspondientes a los bienes y derechos objeto de la declaración especial, ni las pérdidas derivadas de la transmisión de tales bienes y derechos cuando el adquirente sea una persona o entidad vinculada en los términos establecidos en el artículo 16 del texto refundido de la ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

«Cuando sean objeto de declaración bienes o derechos cuya titularidad se corresponda parcialmente con rentas declaradas, los citados bienes o derechos mantendrán a efectos fiscales el valor que tuvieran con anterioridad a la presentación de la declaración especial.»

DOUEDiario Oficial de la Unión Europea de 26/05/2012 [L137](#) [L138](#) [L139](#) [C150](#) [C151](#)

Diario Oficial de la Unión Europea de 29/05/2012

No se publica ninguna norma con trascendencia económico – fiscal

DOGC

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 28/05/2012 – no es publica
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 29/05/2012 – 6137

No es publica cap norma amb transcendència econòmic – fiscal

BOIB

Butlletí Oficial de les Illes Balears de 26/05/2012 – 075

Decreto 44/2012, de 25 de mayo, por el que se regula el procedimiento para la acreditación de la solvencia técnica y profesional a efectos de mantener la clasificación empresarial [\[+ veure BOIB\]](#)

(...) teniendo en cuenta que las empresas clasificadas han de disponer de un instrumento que les permita acreditar y conservar la solvencia técnica y profesional y que la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha de poder conocer si el empresario mantiene la disponibilidad de los medios de solvencia técnica y profesional que en su día motivaron la concesión de la clasificación correspondiente, es necesario regular el procedimiento en relación con esta cuestión en tanto no se promulgue el correspondiente Reglamento estatal de carácter básico (...)

BOCM

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 25/05/2012 - nº 125
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 28/05/2012 - nº 126

No se publica ninguna norma con transcendencia económico – fiscal

DOCV

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 28/05/2012 – nº 6783
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 29/05/2012 – nº 6784

No es publica cap norma amb transcendència econòmic – fiscal

BOPV

Boletín Oficial del País Vasco de 28/05/2012 – 103
Boletín Oficial del País Vasco de 29/05/2012 – 104

No se publica ninguna norma con transcendencia económico – fiscal

BOTHA Boletín Oficial de Araba de 28/05/2012 61

No se publica ninguna norma con trascendencia económico – fiscal

BOG Boletín Oficial de Gipuzkoa de 28 y 29/05/2012 – 100 y 101

No se publica ninguna norma con trascendencia económico – fiscal

BOB Boletín Oficial de Bizkaia de 28 y 29/05/2012 – 101 y 102

No se publica ninguna norma con trascendencia económico – fiscal

BOC

Boletín Oficial de Canarias de 28 y 29/05/2012- 104 y 105

No se publica ninguna norma con trascendencia económico – fiscal

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 29/05/2012

SERIE A: Proyectos de Ley

A-5-11

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Aprobación por el Pleno.

RETRIBUCIÓN ADMINISTRADORES

CONSULTA V0879-12 de 25/04/2012 [\[+ ver consulta completa\]](#)

En el supuesto concreto planteado, el socio mayoritario de la consultante es a su vez, administrador de la mercantil y director general de la misma, percibiendo, por sus labores de gerencia, una retribución mensual.

Con arreglo a los estatutos sociales el cargo de administrador es gratuito.

(...) conviene traer a colación, la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en el Fundamento de Derecho Decimotercero de la sentencia de dicho Tribunal de fecha 13 de noviembre de 2008, acerca de la posibilidad de compatibilizar la condición de miembro de los órganos de administración de una sociedad y la de personal de alta dirección, sometido al Derecho laboral. Así siguiendo la doctrina sentada por las Salas de lo Civil y, especialmente, de lo Social del alto tribunal cabe afirmar que los órganos de administración de las compañías mercantiles, cualquiera que sea la forma que revistan, tienen como función esencial y característica las actividades de dirección, gestión, administración y representación de la sociedad, por lo que se aprecia un punto de coincidencia en la delimitación de las actividades de los administradores y del personal de alta dirección, pues en ambos casos se concreta en el ejercicio de poderes correspondientes a la titularidad de la empresa. No obstante, **en el supuesto de doble actividad, cuando los consejeros asumen las funciones de administrador gerente, en principio, y desde una perspectiva objetiva, es difícil apreciar la dualidad de relaciones (mercantil y laboral especial), por cuanto, a diferencia de lo que ocurre con la relación laboral común, como sea que estas dos funciones no aparecen diferenciadas en nuestro Derecho, debe concluirse que, las primeras absorben las propias de la gerencia, que, en consecuencia, se considerarán mercantiles.**

Con arreglo a lo anterior, dado que, en el supuesto concreto planteado, el administrador de la sociedad ejerce a su vez las funciones propias de la gerencia, no es posible apreciar la dualidad de relaciones -mercantil y laboral especial-, en los términos previamente señalados, sino que debe concluirse que la relación mercantil prevalece sobre la laboral especial. **Habida cuenta que las funciones de gerencia quedan absorbidas por las funciones de administrador y éstas son de carácter gratuito, conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, debe considerarse que la retribución satisfecha al administrador de la entidad responde, en realidad, a una liberalidad en los términos establecidos en el artículo 14.1.e) del TRLIS al resultar superior a lo estatutariamente previsto y, en consecuencia, no será fiscalmente deducible a efectos de determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.**

Por último, procede señalar que, de conformidad con el artículo 101.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del 29 de noviembre), -en lo sucesivo LIRPF-, **el pago de tales cantidades al administrador de la entidad estará sometido a una retención del 35 por ciento. Este porcentaje será del 42 por ciento durante los períodos impositivos 2012 y 2013, según dispone el apartado 4 de la disposición adicional trigésima quinta de la LIRPF.**



4 CONSULTES TRIBUTÀRIES NOVES. ITPAJD

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

76E/12

Modificació d'un contracte d'arrendament financer immobiliari: variació del termini, del tipus d'interès i del diferencial.

Resum:

Per tant, en el supòsit plantejat en tant que l'escriptura impliqui una variació del contingut valuable en relació amb el contracte modificat, restarà subjecta i no exempta de la modalitat d'actes jurídics documentats (AJD) de l'ITPiAJD ja que reuneix els requisits de l'art. 31.2 del Text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

D'acord amb aquest precepte, per tal que es produeixi la subjecció a la modalitat impositiva d'actes jurídics documentats cal que concorrin els requisits següents:

- a) que l'operació es documenti en escriptura pública o acta notarial i;
- b) tingui per objecte quantitat o cosa valuable;
- c) que el document contingui actes o contractes inscripibles en determinats Registres;
- d) que no estiguin subjectes ni a l'impost sobre successions i donacions ni a les modalitats impositives de transmissions patrimonials oneroses ni operacions societàries.

327E/11

Dissolució condomini: tributació.

Resum:

D'acord amb aquesta doctrina, i aplicada al cas, a priori, sembla que hi haurà un excés d'adjudicació perquè, segons es diu a la consulta, ambdós immobles tenen el mateix valor però la participació d'un i altre comuner no són equivalents: un té el 60% i l'altre el 40%, de manera que el primer té un 10% més sobre la seva quota de participació. En el benentès que no és possible fer una altra adjudicació i que els dos immobles són indivisibles, aquest excés tributarà per la modalitat d'actes jurídics documentats (AJD) de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPiAJD).

328E/11

Resolució del contracte d'arrendament financer: tributació.

Resum:

Així doncs, hi hauran dues operacions subjectes a la modalitat d'actes jurídics documentats (AJD) de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPiAJD):

- per la rescissió del contracte d'arrendament financer, que comporta la recuperació del bé objecte d'arrendament per part de l'arrendador.
 - per la cancel·lació de l'opció de compra inherent al contracte d'arrendament financer.
-

342E/11

Edifici en règim de propietat horitzontal: dissolució de comunitat i passí a comunitat ordinària proindivisa. Tributació.

Resum:

D'acord amb l'exposat cal concloure: de primer, com ja s'ha dit, que el règim de propietat horitzontal sobre un immoble no és equiparable a la comunitat de béns, precisament, per inexistència d'aquest tipus de comunitat; i que únicament les comunitats de béns que realitzin activitats empresarials, la seva constitució i dissolució es troba subjecta a la modalitat d'OS de l'ITPiAJD. Per tant, com que no hi ha pròpiament una comunitat de béns, no es realitza el fet imposable subjecte a la modalitat d'OS.

Ara bé, d'acord amb l'art. 553-9 de la Llei 5/2006, el títol de constitució del règim de propietat horitzontal ha de constar en una escriptura pública (document que ha d'inscriure's en el Registre de la Propietat d'acord amb la legislació hipotecària), el que ens porta a analitzar si l'extinció de l'esmentat règim també ha de fer-se per mitjà d'escriptura pública i si, per tant, resulta subjecta a la modalitat d'actes jurídics documentats (AJD) de l'ITPiAJD.